

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**



Ref:	ACCIÓN DE TUTELA N° 11001310500420210014500
Accionante:	LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO C.C. 21.234.964
Accionado:	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. -UARIV

Bogotá, D.C, 16 de abril de 2021

Estando dentro del término legal, procede el Despacho a resolver, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la señora **LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO** en contra de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV** por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición y a la igualdad, el cual hizo consistir en los siguientes:

HECHOS

1. Que interpuso derecho de petición el día 19 de enero de 2021, solicitando una fecha cierta de cuanto y cuando se va a otorgar la indemnización de víctimas por la desaparición forzada de su compañero permanente José Orlando Forero Mora.
2. Que hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna por parte de la entidad.

PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Solicita la parte actora que se ordene a la entidad accionada proceda a contestar de fondo el derecho de petición radicado, manifestando una fecha cierta de cuanto y cuando se va a otorgar la indemnización de víctimas por la desaparición de su compañero permanente.

ACTUACIÓN DEL JUZGADO

Mediante auto de fecha 6 de abril de 2021 este Despacho admitió la acción de tutela presentada por LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -AURIV; y se ordenó dar trámite librándose las comunicaciones correspondientes para que, dentro del término allí establecido, la accionada se pronunciara sobre los hechos de la acción.

RESPUESTA DE LA ACCIONADA

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV

Por su parte la entidad allega respuesta manifestando que, para el caso de la señora LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO, se tiene que una vez verificado el Registro Único de Víctimas – RUV –, se encuentra acreditado su estado de inclusión por el hecho victimizante de homicidio de la víctima directa JOSE ORLANDO FORERO MORA, según el radicado 234684.

Así mismo, la accionante considera que la transgresión de sus derechos se basa en una eventual omisión de la Unidad para las Víctimas respecto de la respuesta de fondo a la solicitud de indemnización administrativa, ante lo cual se tiene que con radicado de salida 20217205192681 de fecha 05 de marzo de 2021, se brindó respuesta a la solicitud, en la que se solicita se allegue soportes del arreglo voluntario acta de conciliación o inasistencia, sin embargo, esta información fue reiterada en comunicación con radicado de salida 20217207808251 de fecha 07/04/2021.

De igual forma, en lo relacionado con la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de homicidio de la víctima directa JOSE ORLANDO FORERO MORA, según el radicado 234684, en marco del Decreto 1290 de 2008, solicitado por la accionante, teniendo en cuenta que dicha medida indemnizatoria ya fue reconocida a otros destinatarios, se deberá adelantar el siguiente procedimiento: Consideramos fundamental recordar que a quienes asiste el derecho a acceder a los recursos de Indemnización Administrativa por hechos victimizantes de homicidio o desaparición forzada es a los beneficiarios de la víctima directa en los términos del artículo 2.2.7.3.5. del decreto 1084 de 2015 y del párrafo 2 del artículo 5 del Decreto 1290 de 2008.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto como la accionante se considera destinataria con igual o mejor derecho, la misma debe adelantar un arreglo voluntario y/o conciliación con las personas a las cuales ya se les canceló los recursos de la indemnización administrativa y posteriormente allegar dicho documento de conciliación a la unidad para las víctimas para que de esta manera la unidad pueda adelantar el cobro coactivo de dichos dineros, por tanto, hasta que la accionante no allegue dicho documento no es posible adelantar el trámite de la devolución de los recursos pagados, en el caso de que no fuera posible, la Unidad para las Víctimas procederá en los términos definidos en la Resolución que se citó, haciendo eso sí, desde ahora la salvedad que, en los casos que hayan sido girados en un 100% los recursos de la indemnización, no se podrá efectuar desembolso alguno hasta tanto no se recauden los recursos ya pagados mediante el procedimiento de cobro coactivo.

Cabe precisar que se realizó la búsqueda de dicho documento de conciliación en nuestras bases de consulta, pero la accionante aún no allega el mismo, por lo cual, ruego a su señoría inste a la accionante para que allegue el citado documento, para poder iniciar las gestiones del cobro coactivo de dichos dineros ya desembolsados y así poder adelantar el trámite pertinente. Lo anterior fue informado a la accionante, frente al derecho de petición elevado, por medio de comunicación escrita con radicado interno de salida No. 20217205192681 de fecha 05 de marzo de 2021 Y 20217207808251 de fecha 07 de abril de 2021.

PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES:

La parte accionante allegó las pruebas relacionadas a folio 3 y la accionada las pruebas obrantes a folios 16 a 27 del plenario.

CONSIDERACIONES

El Artículo 86 de la Carta Magna estableció la Acción de Tutela como un mecanismo sui generis para que todo ciudadano que vea vulnerado cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la misma acuda en procura de su defensa, pero se hace necesario aclarar que no es el único medio para obtener la protección de los citados derechos, toda vez que con la institución de la cual hablamos se pretende dotar a la ciudadanía de un procedimiento autónomo ágil y eficaz cuando se encuentre frente a un peligro inminente e irremediable que no se pueda evitar a través de otra de las acciones legales.

Del análisis del artículo 86 de la Constitución, se colige que la acción de tutela es un mecanismo **subsidiario y residual**, procediendo únicamente, se reitera, cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

Así las cosas, se revisarán los **requisitos de procedibilidad** de la presente acción:

1. Legitimidad en la causa por activa y pasiva

En el caso bajo estudio, encuentra el Despacho que la presente acción es interpuesta por **LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO**, quien actualmente interpuso derecho de petición ante la accionada, solicitando una fecha cierta de cuanto y cuando se va a otorgar la indemnización de víctimas por la desaparición forzada de su compañero permanente José Orlando Forero Mora.

Por su parte, la tutela fue dirigida contra la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV**, entidad legitimada

por pasiva por ser la competente para dar respuesta a la petición elevada por el accionante conforme lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes.

2. Inmediatez

Con relación al principio de inmediatez como requisito de procedibilidad del presente mecanismo, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela deberá interponerse dentro de un término razonable luego de la acción u omisión que vulneró o amenaza con vulnerar un derecho fundamental; sobre el particular la sentencia SU-961 de 1999 estimó que *“la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto”*.¹ En el mismo sentido la sentencia SU-391 de 2016 señaló que *“[n]o existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”*. Sentencia T171-18.

Teniendo en cuenta lo anterior y del examen de las pruebas allegadas por la parte accionante, se tiene que el derecho de petición fue presentado en un término razonable, por lo cual en el caso que nos ocupa dicha acción cumple con el requisito de inmediatez.

3. Subsidiariedad

Los artículos 86 de la Constitución Nacional y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan que, la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; sin embargo la Corte Constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que *“un medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”*.² Así mismo, en Sentencia T-052 del 24 de enero de 2008³ dispuso lo siguiente:

“Dada la esencia de la acción de tutela, es este un mecanismo judicial que opera de manera preferente y sumaría para la protección de derechos fundamentales que se vean amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares. Esta acción cuenta con un carácter subsidiario y residual, de acuerdo con lo cual sólo se permite su procedencia cuando el afectado no dispone

¹ Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

² Corte Constitucional, sentencias T-311 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández y SU-772 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.

³ M.P. Rodrigo Escobar Gil

de otro medio de defensa judicial o cuando existiendo se promueve como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.”

Así las cosas, frente al principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción constitucional, encuentra el Despacho que la accionante no dispone de otros mecanismos judiciales para exigir la protección del derecho fundamental de petición, así las cosas, en el caso objeto de examen se cumple con dicho requisito.

Una vez superados los requisitos de procedibilidad de la presente acción, el despacho procede a analizar si hay lugar a tutelar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

Ahora bien, los Derechos fundamentales no son solamente los que se hallan consagrados en el título II de la Constitución, si no que estos se encuentran a lo largo de la Carta. Pues como lo ha dicho la H. CORTE CONSTITUCIONAL en el fallo proferido dentro del expediente No. T- 664 con ponencia del Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO.

Por ello, el Juez de Tutela debe partir del Art. 5 y 94 de la Constitución para desentrañar si del caso en concreto se desprende un derecho Fundamental que tutelar.

El Derecho de petición es la facultad concedida a las personas para poner en actividad la autoridad pública o particular sobre un asunto o situación determinada. El Art. 23 de la Carta Magna ubicado dentro del título II capítulo I titulado “DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES” nos dice que uno de esos derechos es presentar peticiones respetuosas y “...OBTENER PRONTA RESOLUCION...”

Sobre el tema ha dicho el constitucionalista Dr. JACOBO PEREZ ESCOBAR:

“... El Derecho de Petición es tan fundamental que sin él serían nugatorios todos los demás. Esto es un derecho que sirve de medio para hacer valer los demás cuando son desconocidos o vulnerados. De ahí su naturaleza especial...” (Derecho Constitucional Colombiano, 2ª. Edición Editorial horizonte, página 285).-

Pues bien, aterrizando al caso en concreto, se tiene que la accionante solicita la protección del derecho fundamental de petición, mediante el cual solicitó una fecha cierta de cuanto y cuando se va a otorgar la indemnización de víctimas por la desaparición forzada de su compañero permanente José Orlando Forero Mora.

Como puede verse, la actora acude a la acción de tutela en busca de que se ordene como consecuencia de tutelar el derecho fundamental

invocado, lo mismo que solicitó a través de la petición presentada ante la accionada el 19 de enero de 2021, y de la cual, dentro del trámite de la presente acción, la accionada le allega nuevamente respuesta, y la cual es debidamente notificada.

Así las cosas, para este Despacho es claro que la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -UARIV no ha incurrido en la vulneración del derecho fundamental de petición que le asiste al actor, como quiera que se le informó de forma clara lo solicitado.

De lo planteado tenemos que, no existe en estos momentos vulneración alguna del derecho fundamental invocado, pues, lo solicitado en dicha acción de tutela, fue resuelto con la contestación de su derecho de petición elevado, el cual se observa además que fue debidamente notificado a la dirección de correo electrónico aportado, visible a folio 20 del plenario, el día 9 de marzo de 2021, y el cual fue debidamente recibido, como consta a folio 26 a 27.

En consecuencia, mal podría el Despacho, proferir un fallo protector de los derechos reclamados en tutela, cuando como se ha dicho, no se encuentran vulnerados. Bien lo ha dicho, nuestra máxima autoridad guarda de la Constitución, que ante la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión ante esa misma Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado, opera el fenómeno del hecho superado.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de Bogotá del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia constitucional en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Ley.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO de la acción de tutela presentada por **LUZ NOHEMY VÁSQUEZ OROZCO** por encontrarse ante un hecho superado según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: Esta providencia podrá ser impugnada dentro del término legal a través del correo electrónico con que cuenta este despacho jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co

CUARTO: En caso de no ser impugnado el presente fallo **REMITIR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Una vez regrese el expediente a este despacho si la presente acción no es seleccionada para revisión por dicha corporación, se ordena su archivo sin providencia que lo autorice.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez,



ALBERT ENRIQUE ANAYA POLO